

# **Memoria social sobre la violencia y recuperación productiva: Ayacucho 1991-2014. Un acercamiento al problema.**

Eduardo Toche<sup>1</sup>

## **Resumen ejecutivo**

El conflicto armado interno (1980-2000) tuvo lugar principalmente en los márgenes rurales y urbanos de un Estado que expuso antiguas e insuperadas debilidades

Los procesos y reflexiones sobre la construcción de memorias en torno al conflicto interno, no han reparado en los daños ocasionados en la infraestructura productiva ni en las redes sociales para producir y gestionar los recursos naturales, con la importancia que merecen. Más allá de los datos generales expuestos, no parece haberse levantado información local que haya dado cuenta de la magnitud que tuvo la destrucción de infraestructura en el mundo rural y los impactos que ocasionó.

La pregunta que surge es ¿cómo se dio la recuperación social para volver a producir? Las deficiencias en la construcción de memorias, que enfatizan las relaciones sociales que se tejen para la producción y la gestión de los recursos naturales, impide que se forme una valoración de estos aspectos y, por tanto, no puede visualizarse la probabilidad de producción de violencia.

## **Introducción**

El conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 fue el episodio de violencia más intenso y prolongado de toda la historia republicana. Ayacucho fue el departamento que concentró la mayor cantidad de muertos y desaparecidos reportados a la CVR (más del 40%). Junto con Ayacucho, en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín, la CVR registró cerca del 85% de las víctimas que le fueron reportadas en los testimonios.

Entonces, un aspecto a tener en cuenta es que el conflicto armado interno tuvo lugar principalmente en los márgenes rurales y urbanos de un Estado que expuso antiguas e insuperadas debilidades: i) las fracturas estructurales expresadas en pobreza, desigualdad, exclusiones y discriminaciones regionales, raciales, étnico-culturales, generacionales y de género; ii) sus graves limitaciones como Estado nacional, que debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos sin violentar los derechos reconocidos; y iii) la inexistente legitimidad del orden constitucional y la poca firmeza del estado de derecho, cuestionados ampliamente en la sociedad peruana.

De esta manera, un patrón dominado por una importante brecha de desigualdad se expresaba no sólo en términos de ingresos sino también en la distribución de poder político y simbólico. A ello, se traslapaba otras brechas: entre Lima, la ciudad capital, y las provincias; entre las regiones naturales del país (costa, sierra y selva); entre los grupos étnico-culturales y raciales.

Obviamente, esta situación produjo crecientes tensiones que no fueron resueltas por una institucionalidad estatal muy debilitada que además, no tuvo manera de manejar los rápidos y profundos procesos de modernización que se habían desencadenado en el país durante la segunda mitad del siglo XX y materializado en las grandes

---

<sup>1</sup> Historiador; Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo DESCO.

migraciones campo-ciudad, la universalización del acceso a la educación, la expansión de los medios de comunicación y la densificación de las redes sociales a través de la multiplicación de organizaciones sindicales y campesinas que fueron reconocidas por el Estado peruano, sobre todo a partir de los años 60. Estos y otros procesos fueron desgastando las bases del orden tradicional pero sin solución de continuidad, lo que generó una creciente frustración.

Sobre estas redes sociales, un resultado de la violencia fue que el segundo grupo ocupacional más golpeado por el PCP-SL, luego de los campesinos, estuvo conformado por las diversas autoridades locales y dirigentes sociales que existían en las zonas donde el conflicto armado interno tuvo lugar (alcaldes, regidores, subprefectos, gobernadores, tenientes gobernadores, jueces de paz, dirigentes locales, etc.). De acuerdo con los testimonios recibidos, aproximadamente 1680 personas, es decir, el 21% de las víctimas fatales provocadas por el PCP-SL reportadas a la CVR fueron autoridades de este tipo. Esto constituyó, según la CVR, “un duro golpe a la capacidad de intermediación política de las zonas afectadas por el conflicto armado interno. Es evidente que toda una generación de representantes e intermediarios políticos locales ha sido eliminada intencionalmente por el PCP-SL en su estrategia de generar un vacío de poder que pueda ser posteriormente llenado por sus propios cuadros”.

De otro lado, estuvo la destrucción de infraestructura. En 1988 la Comisión Especial del Senado encargada de investigar sobre las causas de la violencia política y la pacificación<sup>2</sup>, presidida por el senador Enrique Bernal, concluyó que los costos económicos ocasionados por los grupos subversivos a nivel nacional ascendían aproximadamente a US\$ 9'184,584.648, y que la magnitud del daño era equivalente al 66% del total de la deuda externa (a ese año) y al 45% del PBI. El cuadro siguiente muestra el costo económico de la violencia, por sectores económicos, señalado en dicho estudio:

**Cuadro 1:**  
**Costo económico de la violencia 1980-1988**

Sector	Costo directo	Costo de oportunidad	Total
Agricultura	300'000,000	1,500'000,000	1,800'000,000
Defensa			980'000,000
Energía y minas	1,076'535,217	900'000,000	1,976'535,217
Industria y comercio	1,300'000,000	2,500'000,000	3,800'000,000
Transportes y comunicaciones	42'649,431	500'000,000	542'649,431
CORDES	N.D.	N.D.	N.D.
Municipios	N.D.	N.D.	N.D.
Proyectos especiales	N.D.	N.D.	N.D.
Otros	85'400,000		85'400,000
<b>TOTALES US\$</b>	<b>2,804'584,648</b>	<b>5,400'000,000</b>	<b>9,184'584,648</b>

Fuente: tomado del estudio «Violencia y Pacificación». Comisión Especial del Senado. DESCO y Comisión Andina de Juristas. Lima. 1989.

De acuerdo a otros estimados<sup>3</sup>, entre 1980 y 1988 la subversión habría ocasionado la pérdida de dos mil millones de dólares al destruir la estructura de las torres de electricidad de alta tensión. Otro estudio, editado por el Instituto Constitución y

<sup>2</sup> Comisión Especial del Senado *sobre las causas de la violencia y alternativas de pacificación en el Perú: Violencia y Pacificación*. Senado de la República, CAJ, DESCO. Lima, 1989.

<sup>3</sup> DESCO Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo: *Violencia política en el Perú 1980 - 1988*. Tomo I y II. Lima, 1989.

Sociedad en el año 1993, llegó a estimar en US\$ 21,000 millones de dólares las pérdidas económicas para el país durante el periodo 1980-1992<sup>4</sup>.

Detengámonos en estos aspectos. Los procesos y reflexiones sobre la construcción de memorias en torno al conflicto interno, no han reparado en ellos con la importancia que merecen. Más allá de los datos generales expuestos, no parece haberse levantado información local que haya dado cuenta de la magnitud que tuvo la destrucción de infraestructura en el mundo rural y los impactos que ocasionó.

Además de los costos económicos en sí, esta situación involucra lo perdido en términos de gestión, es decir, la densa red social que se había organizado para el uso y mantenimiento de la referida infraestructura, la que terminó desarticulada como producto directo de la violencia. La pregunta que surge es ¿cómo se dio la recuperación social para volver a producir?

Llevar a cabo esta operación requería trabajos de la memoria, como diría Elizabeth Jelin<sup>5</sup>. Al respecto, seguramente hay abundancia de situaciones que podría reconstruirse para tratar de formarnos una idea de lo ocurrido en torno a la dimensión productiva y las lecciones que podrían extraerse de ello.

### **El caso de Chuschi**

En esa línea, la comunidad de Chuschi es un buen caso. Es uno de las seis distritos que conforman la Provincia de Cangallo, ubicada en el departamento de Ayacucho. Fue reconocida como comunidad indígena (denominada comunidad campesina con la actual ley) en 1941, gracias a los esfuerzos de un pequeño grupo de emigrantes que vivían en Lima. Quispillaqta y Canchacancha, los otros dos poblados principales del distrito, también son comunidades campesinas legalmente reconocidas, lo que significa que sus grandes extensiones de pastizales comunales no pueden ser alienadas de la comunidad, que controla directamente los derechos de usufructo.

Su fama reciente se debe que allí, el 17 de mayo de 1980, Sendero Luminoso dio inicio simbólico a su lucha armada, quemando las ánforas en donde se depositaron los votos de las Elecciones Generales convocadas para ese año.

---

<sup>4</sup> Carbajal Pérez, Jaime y Percy Uriarte Otoyá: *Economía y violencia*. Instituto Constitución y Sociedad. Lima, 1993.

<sup>5</sup> Jelin, Elizabeth: *Los trabajos de la memoria*. Siglo XXI de España Editores. Madrid, 2002.

**Mapa 1**  
**Distrito de Chuschi**



**Cuadro 2**  
**Chuschi: principales indicadores**

Indicador	Medida	Año	CHUSCHI
Superficie	Kilómetros cuadrados	2012	432.0
Población estimada	Personas	2015	7 965
Total hombres	Personas	2015	3 833
Total mujeres	Personas	2015	4 132
Población de 0 a 14 años	Personas	2013	3 048
Población de 15 a 64 años	Personas	2013	4 526
Población de 65 y más años	Personas	2013	488
Nacimientos	Personas	2011	246
Defunciones	Personas	2011	34
Matrimonios	Número	2011	23
Desnutrición crónica (<5 años)	Porcentaje	2009	42.2
Población en Edad de Trabajar	Personas	2007	5 240
PEA	Personas	2007	2 756
PEA ocupada	Porcentaje	2007	2 853
PEA Adm. Pública y Defensa	Personas	2007	26
PEA Agricultura	Personas	2007	2 201
PEA Pesca	Personas	2007	-
PEA Minería	Personas	2007	2
PEA Manufactura	Personas	2007	80
PEA Sect. Educación	Personas	2007	70
PEA Electricidad, Gas y Agua	Personas	2007	2
PEA Construcción	Personas	2007	63
PEA Rest. y Hoteles	Personas	2007	23
PEA Transp. y Comunicaciones	Personas	2007	9
PEA Sect. Financiero	Personas	2007	-

PEA Sect. Inmobiliario	Personas	2007	3
PEA desocupada	Porcentaje	2007	50.0
Acceso a agua potable (red pública)	Viviendas	2007	861
Acceso a telefonía fija	Porcentaje	2007	45.5
Hogares c/ Telf. móvil	Porcentaje	2007	9.1
Hogares c/ TV Cable	Porcentaje	2007	9.1
Hogares con internet	Porcentaje	2007	36.4
Pobreza	Porcentaje	2009	73.6
Alfabetismo	Personas	2007	5 548

**Fuente: INEI**

Por ello, Chuschi, según los especialistas, debe ser el caso más abordado, en medio de una aun escasa bibliografía, cuando se busca comprender el ciclo de violencia política que asoló al país entre 1980 y 1995. Así, durante los últimos tiempos ha sido materia específica de los esfuerzos de investigadores como Miguel La Serna<sup>6</sup> y Martí Sánchez<sup>7</sup>.

Previamente, teníamos a la mano el clásico abordaje realizado por Billie Jean Isbell<sup>8</sup>. Asimismo, aun cuando no refería específicamente a Chuschi, aunque incluida como parte de su ensayo general sobre Ayacucho, está Antonio Díaz Martínez<sup>9</sup>. También, entre la importante bibliografía dedicada a Ayacucho, la violencia y el post-conflicto, estimamos necesario rescatar para nuestros fines las contribuciones de Jaymie Patricia Heilman<sup>10</sup>, Heraclio Bonilla<sup>11</sup> así como los muy conocidos textos de Carlos Iván Degregori sobre los orígenes de Sendero Luminoso<sup>12</sup>

En términos generales, el denominador común de esta escueta pero importante bibliografía referida es que de alguna manera alimentan una comprensión estructural de la violencia rural desatada en Ayacucho, poniendo énfasis en factores como el impacto de la educación y la alfabetización en estructuras sociales pre-modernas (como sería el caso de Carlos Iván Degregori), la fuerza y poca maleabilidad de los regímenes políticos locales y sus sectores dominantes (Antonio Díaz Martínez), la pobreza y la diferenciación campesina (Billie Jean Isbell), la caracterización de los actores políticos locales, entre otros factores.

Sin embargo, pese a ser resaltado una y otra vez, las relaciones inter-comunales e intra-comunales no son desarrolladas en toda su amplitud. En esta línea, las relaciones productivas y la gestión de los recursos son dejados de lado, salvo en el

<sup>6</sup> La Serna, Miguel: *The Corner of the Living. Ayacucho on the Eve of the Shining Path Insurgency*. The University of North Carolina Press. 2012.

<sup>7</sup> Sánchez, Martí: *Pensar los "Senderos" olvidados de historia y memoria: La violencia política en las comunidades de Chuschi y Quispillacta, 1980-1991*. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2007. *El horror olvidado: memoria e historia de la violencia política en Ayacucho, Perú (1980-2000)*. Tesis doctoral. Department d'Antropologia social i cultural; Facultat de Filosofia i Lletres; Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 2015.

<sup>8</sup> Isbell, Billie Jean: *To Defend Ourselves. Ecology and ritual in an Andean village*. Waveland Press Inc. Prospect Heights (Il.), 1978, reissued 1985.

<sup>9</sup> Díaz Martínez, Antonio: *Ayacucho: hambre y esperanza*. Editorial Mosca Azul. Lima, 1985

<sup>10</sup> Heilman, Jaymie Patricia: *Before the Shining Path. Politics in Rural Ayacucho, 1895-1980*. Stanford University Press. 2010.

<sup>11</sup> Bonilla, Heraclio: *La defensa del espacio comunal como fuente de conflicto. San Juan de Ochos vs. Pampas (Ayacucho), 1940-1970*. Cuaderno de Trabajo, Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 1989.

<sup>12</sup> Degregori, Carlos Iván: *Sendero Luminoso: los hondos y mortales desencuentros*. Documento de trabajo 4. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 1989. *Sendero Luminoso: lucha armada y utopía autoritaria*. Documento de trabajo 6. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 1989.

caso de Díaz Martínez para lo referente a las relaciones para la producción, pero abordada de forma superficial, sin mayor ahondamiento.

Bajo estos términos, debe resaltarse la importancia que tuvo en su momento el debate propuesto por Orin Starn, sobre el denominado “andinismo” que estaría caracterizando a los estudios que buscaban comprender la violencia, especialmente desde círculos estadounidenses, que no siguió desarrollándose<sup>13</sup>. Tal vez, este intenso intercambio, de haberse continuado, debía tocar la producción y la organización social para llevarla a cabo, como ámbito desde donde podía explicarse el conflicto y la violencia en el campo ayacuchano. Desgraciadamente, no fue así.

En todo caso, debemos rescatar puntos de vista como los de Heraclio Bonilla, que prestó atención al permanente conflicto provocado por recursos escasos y baja institucionalidad. Así también, Martí Sánchez relata el *continuum* de uno de estos conflictos, precisamente el suscitado entre Chuschi y Quispillacta, alrededor de la tierra.

Para Bonilla<sup>14</sup>, el conflicto entre las comunidades de Ocros y Pampas ilustra que la conflictividad campesina no sólo existe, sino que es durable, y que en su estallido “la fuerza y la capacidad relativa de cada comunidad parecen no contar”. De otro lado, es un conflicto que se escenifica simultáneamente en varios ámbitos: “en el terreno y en la Corte, a través de un mecanismo que se retroalimenta, y por lo mismo su resolución está delegada al aparato judicial del país y no es más, por lo menos en los pleitos sobre tierras, establecida por las mismas comunidades. De ahí, también, el papel capital jugado por abogados, notarios y policías”.

Concluye Bonilla, afirmando que el conflicto fortalecía a la comunidad, porque “brinda el escenario y la justificación necesarias para que ella se deshaga de sus elementos ‘disfuncionales’”. Pero al mismo tiempo, en un contexto más vasto, **el enfrentamiento entre dos o más comunidades facilita el control y la manipulación de las mismas por parte de quienes tienen el control de aquellos recursos que requieren estas comunidades para continuar su enfrentamiento.**

En el caso estudiado por Bonilla –Ocros vs. Pampas- la razón del conflicto -el lindero- no parece guardar relación con la sobrevivencia de la comunidad, “tampoco se trataba de una identificación mítica de la comunidad con su territorio, puesto que aquello que está en disputa lo constituyen terrenos muy mal conocidos y ocupados”. Lo que buscaron a todo trance más bien fue su reconocimiento como comunidades de indígenas, para lo cual era necesario demostrar la posesión de un territorio que fuera posible justificar documentalmente, por lo tanto apelando a la historia. Tal reconocimiento consolidaba posesiones precarias y les permitía una teórica protección del gobierno, al mismo tiempo que facilitaba el acceso a los recursos del Estado peruano.

Sánchez, por su lado, reconstruye un conflicto centrado también en la tierra entre las comunidades de Chuschi y Quispillacta, cuya versión contemporánea se remontaría a 1941. Un acta de conciliación entre las dos comunidades, fechada el 21 de octubre de 1941, propuso que la zona en disputa fuese equitativamente repartida, en tanto era casi improbable reconocerse con exactitud los linderos de la propiedad en conflicto<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Starn, Orin. “Antropología Andina, Andinismo y Sendero Luminoso”. Allpanchis (39), 1992.

<sup>14</sup> Bonilla; op. cit.

<sup>15</sup> Sánchez; El horror olvidado ... op. cit. p. 207

Sin embargo, el levantamiento de los planos no se llevó a cabo y la tensión entre las comunidades volvió a recrudecer en los últimos meses de 1959, y las comunidades volvieron a enfrentarse de forma violenta por la tenencia de terrenos. Vendría luego una sucesión de enfrentamientos alrededor de terrenos que ambas partes disputaban, incluso teniendo como resultados comuneros muertos por heridas de bala, como ocurrió el 3 de mayo de 1960.

En esta última situación, parece que no sólo estuvo en cuestión la usurpación de tierras sino también el robo sistemático que hacían los pobladores de Chuschi del ganado que pastaba en dichos terrenos. Aquí debemos resaltar que para La Serna, el abigeato también fue una causa muy importante en los conflictos sostenidos entre Chuschi y Quispillacta, agravados por la inoperancia de las autoridades que debían controlarlo, en tanto el sistema tradicional de autoridades había entrado a una fase de crisis y, de otro lado, las autoridades estatales eran muy débiles o simplemente no existían.

De esta manera, afirma Sánchez, los litigios y conflictos entre ambas comunidades continuaron, y el 10 de mayo de 1980, es decir, a solo siete días de la acción senderista que quedó registrada como el inicio de la lucha armada (17 de mayo de 1980), se escenificó un nuevo capítulo del permanente conflicto entre estas dos comunidades. Luego, el 26 de abril de 1980 se reunieron los representantes de Chuschi y Quispillacta para aclararse sobre la materia del litigio, en otras palabras, los linderos que debían dividir sus tierras.

Sin embargo, el 3 de marzo de 1981, la comunidad de Quispillacta demandó a su vecina Chuschi por la violenta invasión de los sectores *Viscacha huayco*, *Ccoyllore ccocha*, *Huiro corral*, *Quimsa Cruz*, *Pallca Arapa* y *Rapascca*. Afirmaban que pobladores de Chuschi habían incendiado once chozas que servían de vivienda eventual de los pastores quispillactinos que tenían ganado en los sectores señalados. A su vez, la comunidad de Chuschi, a través de su presidente comunal, entabló una contrademanda el 20 de abril de ese año, bajo los cargos de “pago de daños y perjuicios y recobrar terrenos invadidos”, intentando recobrar la posesión de los terrenos señalados, exigiendo además que la comunidad de Quispillacta “cese en sus constantes actos violentos y amenazas de invadir otros terrenos de su comunidad”.

Cuando todo parecía indicar que la violencia se instalaría nuevamente, el conflicto se detuvo y fue encauzado rápidamente hacia una solución. Según Sánchez, este desenlace fue el resultado de la influencia adquirida por Sendero Luminoso en la zona, “como un nuevo poder con injerencia en las decisiones y acuerdos de las comunidades del distrito; tratando de concretar sus planes”. Para ello necesitaba conciliar los conflictos intercomunales del espacio distrital. De esta manera, “la justicia senderista actuó en este caso disolviendo las diferencias entre las comunidades y presentando un enemigo externo ante el cual deberían hacer causa común”.

Como podrá notarse, el argumento de Sánchez se alinea con aquellas comprensiones que resaltan la legitimidad inicial de Sendero Luminoso, en tanto ofertante de servicios –en este caso, justicia básica- que el Estado no puede hacer. Así, si Bonilla supuso que las comunidades se enfrentaban para obtener el reconocimiento del Estado y, con ello, los servicios de éste, una variante de este mecanismo conflictivo fue Sendero en la versión de Sánchez.

La Serna también está de acuerdo con esta comprensión. Para él, durante la fase inicial del conflicto armado (1980-1983), los campesinos apoyaron voluntariamente la

violencia política; confirmando lo que había señalado Stathis N. Kalyvas<sup>16</sup> acerca de que la violencia desplegada en una guerra civil "privatiza la política" por cuanto los actores guerrilleros la "usan" para ajustar cuentas locales. En efecto, La Serna demuestra que los campesinos aprovecharon el conflicto interno para lograr soluciones violentas a los asuntos locales, que fueron a menudo sólo tangencialmente relacionados con la política que le imprimió Sendero Luminoso al conflicto armado<sup>17</sup>.

De esta manera, advierte que debemos prestar atención a los contornos locales, a veces inesperados, de la experiencia comunitaria. Este requiere una exploración a largo plazo de las complejidades de la vida de la comunidad y la naturaleza específica de éstas. Para entender lo que sucedió debemos asumir que las relaciones de poder en el largo plazo, los conflictos sociales, y los entendimientos culturales de estas relaciones a nivel local condicionaron las respuestas campesinas a la rebelión maoísta. Así, La Serna sostiene que las reacciones de los comuneros fueron totalmente coherentes con sus historias locales específicas, haciendo de este modo comprensible su comportamiento colectivo durante el conflicto armado. La cuestión aquí eran las nociones campesinas de poder, justicia y orden público.

En suma, afirma que Sendero Luminoso recibió el apoyo más entusiasta en comunidades como Chuschi, porque los pactos de poder múltiples se habían incumplido sin posibilidad de reparación, a pesar de las intervenciones de las autoridades consuetudinarias. Por el contrario, Sendero Luminoso recibió la oposición más firme en lugares, como Huaychao, en la provincia de Huanta, al norte del departamento de Ayacucho, donde los campesinos creían que la autoridad consuetudinaria y la justicia habían conservado exitosamente potentes pactos histórica y culturalmente establecidos, valores colectivos y códigos de conducta.

De forma más general, sin referir a algún caso específico, Carlos Iván Degregori también señala que el conflicto estará signado por el escaso manejo que tendrán las instituciones del Estado en una dinámica muy intensa de cambios. Degregori, manifiesta que la predominancia capitalista "unificó el mercado interno pero empobreciendo el campo y arrinconando la economía natural. Se desmoronaron los poderes locales y las economías de autosubsistencia pero persistió el saqueo del agro y de los campesinos. El mercado es el nexo entre el capitalismo y el precapitalismo entre el monopolio y la producción familiar campesina entre el capital intensivo y los métodos rurales tradicionales de producción"<sup>18</sup>.

En este contexto, el proceso de democratización social no se consuma y resulta ambiguo mezclando rasgos democráticos y autoritarios. "Sendero luminoso surgirá precisamente en esos intersticios, como producto de esos desfases que se producen entre la capital y las provincias., entre la ciudad y el campo, entre andinos y criollos: y representaría la reacción defensiva y autoritaria de una estrecha franja ubicada en el polo más golpeado y desarticulado por este desarrollo específico: provincias-campesinos"<sup>19</sup>.

En esa línea, Degregori también refiere a la debilidad de las organizaciones sociales<sup>20</sup>. Afirma que pese a la existencia de escuelas, las comunidades de Cangallo, entre ellas Chuschi y Quispillacta, tienen poca tradición de organización moderna. La población adulta no ha formado parte de los grandes movimientos de tomas de tierras de los años 60 y 70, ni de los grandes movimientos de organización gremial en la CCP y la

---

<sup>16</sup> Kalyvas, Stathis: *The Logic of Violence in Civil War*. Cambridge University Press. Cambridge, 2006.

<sup>17</sup> La Serna; op. cit.

<sup>18</sup> Degregori; Los hondos y mortales desencuentros ... op. cit.

<sup>19</sup> *Idem*.

<sup>20</sup> *Idem*.

CNA durante los años 70. “A pesar de sus limitaciones, estos procesos proporcionaron una nueva perspectiva que sacó a las comunidades de sus estrechos linderos, las llevó a desarrollar nuevos niveles de organización democrática: asambleas, elecciones con voto universal. etc. y les proporcionó una mayor apertura hacia la escena política nacional”.

Son comunidades muy encerradas en sí mismas y, además, reticentes al Estado. Tanto *la* zona de Huanta-La Mar como la zona de Cangallo-Víctor Fajardo tienen una antigua tradición de lucha antiestatal expresada, por ejemplo, a través de los llamados "movimientos fiscales", desde por lo menos fines del siglo pasado cuando los campesinos iquichanos se levantan contra la elevación del impuesto a la sal, hasta los movimientos de la Mar en la década de 1920. Incluso en 1979, campesinos de Mollepata, en el distrito de Cangallo, expulsan a la policía y se niegan a aceptar un puesto policial en su localidad. Asimismo, en Vilcashuamán y sus anexos Pomacocha, Chanen y Chito, escenario del único movimiento campesino de envergadura en la zona durante la década de 1960, los campesinos se negaron persistentemente a la instalación de un puesto policial en el distrito<sup>21</sup>.

Igualmente, para Díaz Martínez<sup>22</sup>, la tensión se ubica en la colisión entre lo moderno y lo tradicional resultante de los procesos acaecidos en la segunda mitad del siglo XX en el campo ayacuchano: “Estas vinculaciones entre dos sociedades tan diferentes en el Perú, la urbana y la rural, trae consigo la descomposición de muchas de las instituciones autónomas, se dificulta la integración y el desarrollo comunal, tan comentado, será difícil de lograr en las actuales condiciones. La mayor parte de los técnicos y funcionarios ignoran que en el Perú hay dos culturas diferentes que guardan relaciones entre sí; pero que estas relaciones son desfavorables para la mayoría ...”.

En esa línea, Díaz Martínez prestó atención a las fuerzas del mercado y sus efectos en la economía campesina. De esta manera, consideró que si bien la mayoría de los productos agrícolas (maíz, trigo, cebada, quinua, habas, ocas, mashua, ollucos) son dedicados al consumo familiar, ya había algunos campesinos que se dedicaban al cultivo de papas con fines comerciales “a insinuación de las instituciones técnicas del Estado que, desde hace diez años, insisten en cambiar la agricultura de subsistencia por una agricultura comercial”. Pero, continúa, los resultados son muy inestables, “debido a las inadecuadas relaciones de intercambio y a los riesgos naturales”, y por ello “los campesinos prefieren mantenerse por el momento en su economía cerrada, con un mínimo de comunicación y de relación con la economía de mercado, de la cual es inevitable que se escapen”. En suma, plantea la predominancia de una cultura de aversión al riesgo, muy propia de las sociedades campesinas, que lo estaría acercando a la perspectiva que tuvo Isbell en su momento.

Planteadas de estas maneras las cosas, para Díaz Martínez las amenazas provenían “de afuera” y ante las cuales había poca capacidad para dar cuenta de ellas. “Estas comunidades tuvieron durante mucho tiempo los recursos naturales suficientes para guardar el equilibrio entre el hombre y su ambiente dentro de una economía autárquica. Pero, en los últimos años, el enorme incremento demográfico, ocasionado por el desarrollo de la medicina, ha roto este equilibrio, rompimiento que empuja a los hombres, sobre todo a los más jóvenes, activos e inteligentes, hacia otras regiones, migración ocasionada no por un foco de atracción, sino porque la pobreza se agudiza y el centro de origen constituye un foco de repulsión. Este choque de la población migrante con la cultura urbana los encuentra desadaptados, produciéndose graves crisis sociales”.

---

<sup>21</sup> *Idem.*

<sup>22</sup> Díaz Martínez; *Ayacucho: hambre y esperanza ...* op. cit.

Más adelante argumentaría que “en los últimos 15 años, con las carreteras llegaron comerciantes que instalaron una pequeña tienda de comercio, luego una “chingana” de comida, posteriormente arrendaron tierras para dedicarse a la agricultura y, por último, las compran. Estos mercaderes agricultores son los que hoy poseen mayores pedazos de terreno y son los únicos o pocos que han utilizado las innovaciones tecnológicas traídas por las oficinas públicas especializadas. Como ellos conocen mejor los mecanismos del comercio, se defienden mejor con ambos renglones”.

### **Análisis del caso y las condiciones actuales para la producción del conflicto**

Entonces, los trabajos de memoria, como diría Jelin<sup>23</sup>, no parecen haber tomado en cuenta de manera decisiva la crucial dimensión productiva en la producción del conflicto y la violencia, especialmente las relaciones tejidas para plasmarla y, por lo mismo, no se ha podido generar una idea aproximada de las cuantiosas pérdidas en infraestructura y, sobre todo, la desarticulación de las redes sociales y económicas. De igual manera, tampoco hay una valoración de la reconstitución de ambos factores – infraestructura y tejido social- y el costo compartido asumido por el Estado y la sociedad. Aún más, esta ausencia de valoración puede conducir a una situación en la que no pueda generarse un “balance social” de lo ocurrido y extraer lecciones de ello.

Esto es sumamente importante para enfatizar el hecho de que no es sólo hacer un “balance” y reconstituir una situación que, de hecho, provocaba intensos conflictos sino también, y sobre todo, buscar insertar la comprensión social de lo acontecido en contextos completamente nuevos en el que se tornan decisivos para la economía y sociedad campesina factores como el cambio climático o el rol decisivo del mercado.

En efecto, sobre cambio climático, debemos considerar que los países de la Comunidad Andina concentran el 95% de los glaciares tropicales del mundo, los cuales cubren hoy una superficie estimada en 2,500 km<sup>2</sup>. El 71% de los mismos están ubicados en Perú, el 22% en Bolivia, el 4% en Ecuador y el 3% en Colombia. En todos ellos se observa un franco retroceso atribuible al calentamiento global.

Dado que muchos de los ríos de la subregión provienen de los glaciares, esta desglaciación acelerada impacta en la provisión de agua para agricultura, en el consumo humano de varias de las principales ciudades de estos países, en el uso en la industria y en cuestiones de generación de energía. También incrementa el riesgo y la exposición de la población a peligros climáticos, como los aludes y el desborde de las lagunas glaciales, además de afectar la belleza escénica natural y por tanto, el turismo.

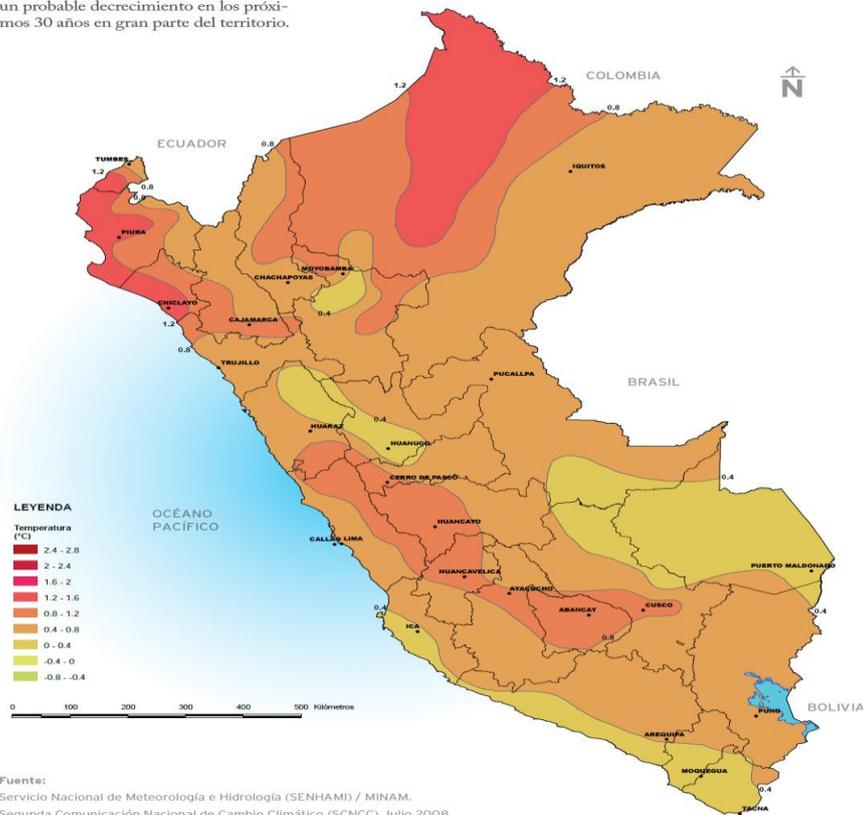
---

<sup>23</sup> Jelin; op. cit.

## Mapa 2

### VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA MÍNIMA ANUAL PARA EL AÑO 2030

Las lluvias extremas estimadas mostrarían un probable decrecimiento en los próximos 30 años en gran parte del territorio.



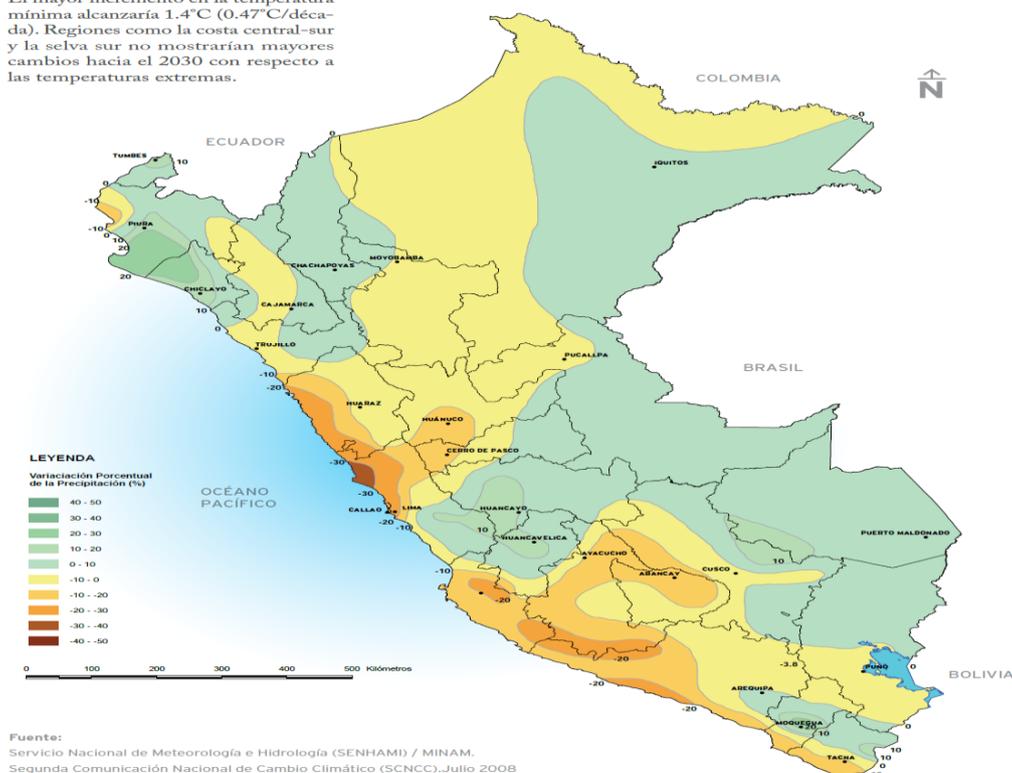
Los glaciares tropicales andinos tienen una importancia económica, social y ambiental considerable. Sus aguas de deshielo aportan con agua potable e industrial a las principales capitales (La Paz, Quito, Lima) y algunas otras grandes ciudades andinas. Proporcionan una gran parte de la electricidad consumida por los países andinos, ya que aproximadamente el 60% de la capacidad instalada energética y el 70% de la generación eléctrica de la Comunidad Andina es de origen hidroeléctrico y por tanto, renovable. El agua de riego, indispensable sobre todo para la cuenca del Pacífico - particularmente árida-, es generalmente de origen glaciar. Los glaciares juegan además un papel de gigantesco reservorios, configurando la variabilidad climática intra e interanual.

A pesar de su modesta extensión (2.500 Km<sup>2</sup>), los glaciares andinos son de interés dado que: (1) son importantes indicadores del cambio climático, (2) juegan un importante rol en el manejo del recurso hídrico, (3) actúan como reguladores del régimen hidrológico en casi todas las regiones andinas, y (4) pueden ser directa o indirectamente, causa de catástrofes. Los estudios desarrollados sobre los Andes Centrales, muestran dos tendencias importantes en los últimos años: un retroceso acelerado de los glaciares y el calentamiento de la atmósfera (0.15°C por década desde 1950). En estas condiciones, solo las cumbres más elevadas (ubicadas a más de 5,500 msnm) de los Andes Centrales estarían cubiertas por glaciares a finales del siglo XXI.

### Mapa 3

#### VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA PRECIPITACIÓN PARA EL AÑO 2030

El mayor incremento en la temperatura mínima alcanzaría 1.4°C (0.47°C/década). Regiones como la costa central-sur y la selva sur no mostrarían mayores cambios hacia el 2030 con respecto a las temperaturas extremas.



De otro lado, sobre el impacto del mercado en las economías rurales, un aspecto recurrente de la “política pública” es el desconocimiento respecto a los actores involucrados en las cadenas productivas agropecuarias y, en ese sentido, la imposibilidad de aplicar una respuesta pertinente a problemas que no ha terminado de definirse.

Al respecto, una cuestión central debe referir a la liberalización de los mercados como signo del modelo neoliberal y, en ese sentido, el impulso a aquello que los nuevos ruralistas denominan “la pluriactividad de los hogares campesinos”<sup>24</sup>, en otras palabras, el involucramiento de estas unidades en una variedad de actividades no agrícolas productivas y de servicios en el ámbito rural.

“(…) para la mayoría de los campesinos su creciente participación en actividades no agropecuarias obedece a sus crisis de reproducción y tales actividades les permiten la sobrevivencia y por tanto no es una política de desarrollo”<sup>25</sup>.

¿Qué quiere resaltar Kay con la cita anterior? Que la ruralidad resultante de la aplicación del modelo neoliberal fuerza a la economía campesina a una mayor

<sup>24</sup> Kay, Cristóbal. «Algunas reflexiones sobre los estudios rurales en América Latina». Íconos. Revista de Ciencias Sociales, n.º 29. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) - sede Ecuador, 2007, pp. 31-50.

<sup>25</sup> *Idem*.

diversificación de fuentes de ingreso, fomentando la pluriactividad, tal como han hecho gran parte de las intervenciones públicas y privadas en el campo, sin incidir que en los cambios del contexto esto es solo reproducir el modelo y, por consiguiente, el despojo campesino.

Ahora bien, debe tomarse en cuenta que la diversificación del portafolio de actividades campesinas es un aspecto consustancial a la aplicación de un modelo neoliberal. Como señala Mayer, la diversificación es un aspecto central en la estrategia de la familia campesina para buscar acceder a una mayor cantidad de recursos y, además, distribuir mejor el riesgo<sup>26</sup>. Junto a ello no debe perderse de vista la integración de la economía campesina al mercado monetario nacional y como esta tiene su propia racionalidad, en la que no necesariamente el mercado libre se presenta como un asignador eficiente de recursos<sup>27</sup>.

Dicho esto, entonces, además de la exacerbación de la diversificación, el neoliberalismo ha dado un nuevo impulso a la diferenciación campesina, en tanto se ha incrementado el empobrecimiento de esta población debido al acceso cada vez menor a los recursos, obligándolos a buscar otras oportunidades de empleo e ingresos en condiciones muy precarias. En esta línea, la pluriactividad sería un mecanismo de sobrevivencia de los campesinos más pobres, en tanto aquellos que tienen mayores recursos –como educación y mejores tierras– logran insertarse en actividades como la microempresa y el comercio<sup>28</sup>.

Esto mismo, de manera minuciosa, lo demuestran Javier Escobal y Carmen Ponce<sup>29</sup> cuando afirman que hubo, al parecer, una evolución de precios relativos agrícolas en las últimas décadas desfavorable para la economía campesina que, obviamente, impactó en los ingresos y en su distribución, aunque no fue el único factor relevante pues igual de importante fueron los cambios ocurridos en los patrones demográficos.

En otras palabras, el deterioro de los términos de intercambio y las novedades que ocurrieron en la composición de la población hizo que los miembros de las familias campesinas se emplearan cada vez más en actividades diferentes a las tradicionalmente rurales, como la agricultura y la ganadería. Así, la reproducción social de las familias depende de una multiplicidad de actividades tanto urbanas como rurales:

“No hablamos de procesos de migración y proletarización, sino de diversificación de actividades (...). La familia campesina no abandona el campo, diversifica las actividades de sus miembros, ampliando su espacio de acción a los ámbitos urbanos”<sup>30</sup>.

**Así, en términos generales, la tendencia es que en los hogares campesinos los ingresos no-agropecuarios superan a los que provienen de las actividades agropecuarias. En esa línea, resulta fundamental que los ingresos extra-agropecuarios, en tanto se proponen como piedra de toque de la reproducción de la economía campesina, sean protegidos mediante leyes y políticas públicas,**

---

<sup>26</sup> Mayer, Enrique. «Campesinos y neoliberalismo. Discusión sobre la teoría económica del campesinado, con énfasis en el medio andino». Ciberayllu, 1999. Ver en: [goo.gl/8iHlmp](http://goo.gl/8iHlmp)

<sup>27</sup> *Idem*.

<sup>28</sup> Dirven, Martine. «El empleo rural no agrícola y la diversidad rural». Revista de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), n.º 83. Santiago de Chile: CEPAL, 2004, pp. 49-69.

<sup>29</sup> Escobal, Javier y Ponce, Carmen. «Una mirada de largo plazo a la economía campesina en los Andes». Desarrollo rural y recursos naturales, n.º 2012-2. Lima: GRADE, 2012, pp.15-93.

<sup>30</sup> Damonte, Gerardo. «Dinámicas rentistas: transformaciones institucionales en contextos de proyectos de gran minería». Desarrollo rural y recursos naturales, N° 2012-2. Lima: GRADE, 2012, pp. 1593.

así como llevar a cabo mayores inversiones en nuevas tecnologías, infraestructura y capacitación de los recursos humanos.

Pero, la principal conclusión de Escobar y Ponce es que, independientemente de la manera como se agreguen las distintas dimensiones de economía campesina en algún indicador sintético que recoja el grado de campesinización de la economía, **“la evidencia sugiere que la economía rural continúa siendo casi tan campesina como lo era hace 30 años”**. En ese sentido, es innegable que la importancia relativa de las distintas dimensiones ha cambiado pero, “no se observa un desarrollo tan dramático en los mercados de productos y factores como para que la economía campesina sea absorbida por otras formas de gestión de recursos y territorio que supuestamente sean más eficientes”.

Asimismo, el análisis que realizan Escobar y Ponce en dos ámbitos campesinos, tipificados previamente como “moderno” y “tradicional”, sugiere que en ambos territorios se observa un creciente proceso de diferenciación, donde algunos logran articularse a las estrategias que el mercado ofrece, mientras que otros, por su aislamiento relativo, baja de educación y reducida dotación de factores de producción, no logran articularse a mercados más dinámicos: “Mientras que en Pomacanchi el rol de las transferencias públicas es creciente y ayuda a explicar una parte importante de los ingresos de aquellos que no logran articularse exitosamente a mercados locales y regionales, en Yanamarca son las transferencias de los migrantes las que cubren la brecha entre los ingresos generados en el territorio y las necesidades de consumo”<sup>31</sup>.

### Cuadro 3

Distribución de transferencias, remesas, donaciones y otros ingresos DTR 2009

	Yanamarca Región Moderna	Pomacanchi Región Tradicional
Remesas de familiares	40.0%	11.3%
Programa Público JUNTOS	17.3%	38.2%
Fondo de jubilación, pensiones	33.8%	7.9%
Seguro Social (EsSalud, SIS)	1.0%	5.1%
Donaciones alimentarias	4.5%	35.4%
Otras transferencias	3.5%	2.1%
Total %	100%	100.0%
Monto anual promedio per cápita (S/.)	284.8	286.5
Importancia de las transferencias en el ingreso total	12.6%	12.7%

Fuente: Escobar y Ponce, 2012

Pero, vistas las cosas así, deben contemplarse también los otros rápidos y profundos cambios que ya han empezado a ocurrir en este contexto, preguntándonos ¿Qué va a ocurrir en las zonas rurales con la caída de precios de los minerales y la

<sup>31</sup> Escobar, Javier y Carmen Ponce: “Una mirada de largo plazo a la economía campesina en los Andes”. *Desarrollo rural y recursos naturales*, N° 2012-2: GRADE. Lima, 2012.

desaceleración de la economía? Es conocido que en varias regiones del país el proceso de expansión minera generó una dinamización de las economías locales, especialmente en el campo de los servicios. Los recursos llegaron a través de los programas de responsabilidad social y relaciones comunitarias de las empresas, y luego desde el flujo de fondos por concepto de canon —dilapidados con la anuencia del MEF, que lo único que trajo fue un conjunto de obras inconexas, mal diseñadas y poco pensadas en el marco de alguna visión de desarrollo—, alimentaron un fallido mecanismo de redistribución que no ha transformado sustantivamente la situación de la población rural.

Para Javier Torres, algunas políticas nacionales (como la mejora de caminos rurales y de algunas de las principales carreteras, y la penetración de la telefonía) y programas de transferencias condicionadas le han permitido a un importante sector de la población rural salir de la pobreza, aunque no ir mucho más allá. Lo han hecho con una escasa conexión y articulación con el mercado, pero a la vez se ha potenciado el crecimiento poblacional de las ciudades intermedias, en un proceso de despoblamiento rural que, sin embargo, no significa el abandono total del campo, más aun cuando los grandes proyectos extractivos han revalorizado las tierras.

Entonces, por un lado están las iniciativas privadas y, de otro lado, los programas sociales del Estado. La pregunta en ambos casos es ¿cuál es el objetivo previsto en estas estrategias? En todos los casos, con seguridad, no ha estado presente la inhibición del conflicto o su gestión para evitar el descontrol violento. En otras palabras, estas propuestas no prestan importancia a los mecanismos intermediadores ni reguladores.

En general, es un problema extendido de un Estado con muy poca capacidad para “ver” y gestionar lo local y, en ello, “cancelar” las posibilidades de desencadenamiento de ciclos de violencia que, hasta el momento, pareciera tener una clave central en la escasez de recursos y un bajo nivel de institucionalidad que impide la formación de espacios en donde la sociedad y el Estado formulen constantes y legítimas negociaciones.

## **A modo de conclusión**

¿Qué tenemos actualmente en Chuschi, que pueda ser contrastado con el pasado descrito? Sorprendentemente, serían permanencias y no cambios. En el 2014, la revista *Ideele*, del Instituto de Defensa Legal, publicó un especial sobre esta comunidad, resaltando los problemas de linderos que estaba afectándola.

Según el reportaje<sup>32</sup>, el Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la ordenanza 30013, había impuesto una nueva demarcación que le recortaba casi 6 mil hectáreas al distrito de Chuschi. En su afán por sanear una serie de problemas limítrofes, tomó como referencia un censo realizado en 1969 en el cual arbitrariamente se determinó que Rumichaca, Choccoro y Patahuasi pertenecerían al distrito de Vinchos. Sin embargo, para un importante grupo de pobladores la razón está en el potencial minero que tiene la zona, a lo que debe agregarse el hecho de ser una cabecera de cuenca, que abastece de agua a Huamanga<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> Ideele: “Chuschi: tras cuernos, palos”. En: *Ideele* 236.

<http://www.revistaideele.com/ideele/content/chuschi-ii-tras-cuernos-palos>

<sup>33</sup> Ideele: Chuschi III: desmembramiento. En: *Ideele* 236.

<http://www.revistaideele.com/ideele/content/chuschi-iii-desmembramiento>

Todo parece indicar que en la zona hay recursos minerales, en específico, cobre y plata, que dio pie a que se concesionen algunas áreas. Por ello en el 2009, los campesinos de Chuschi denunciaron a la empresa Newmont “por haber iniciado trabajos de exploración en las tierras comunales sin contar con su autorización”.

A propósito del agua y la minería, el Municipio de Chuschi tiene un plan en ciernes: dado que la cabecera de cuenca queda en el distrito de Chuschi y que están trabajando proyectos de cosecha de agua, plantean que los huamanguinos paguen un sol más en cada recibo como servicios ambientales para ser usado en agricultura, forestación y cosecha de agua.

Sin embargo, Teófilo Nuñez, el alcalde chuschino que impulsa estos mecanismos de financiamiento, también está sumamente cuestionado porque propone el “achicamiento” de su distrito. En resumen, resolvió a favor del pedido de un grupo de pobladores que quería dejar su pertenencia a Chuschi: así, “los caseríos de Huahualla y Condorbamba, y toda la comunidad de Chacolla, han sido anexados al distrito de María Parado de Bellido”.

Los pobladores de Chacolla denunciaron que habían sido sorprendidos, porque no quieren ser parte de María Parado de Bellido, habiéndose falsificado sus firmas. Al respecto la acumulación de todos estos problemas conduce a la formulación de una idea sorprendente, por parte de Aparicio Escalante, presidente de la comunidad de Chacolla y que es recogida por el reportero de Ideele: **“Las familias de esa zona que antes vivían tranquilas ahora se están llenando de rencores y enemistades. Esta situación es muy grave para el desarrollo del pueblo. Esto puede terminar en un conflicto social.** Nosotros pedimos que para finiquitar estos problemas debería haber una consulta poblacional. Más bien necesitamos que el Gobierno Central nos facilite maquinarias, movilidad o volquete para hacer un proyecto productivo con piedra de chacolla”.

Siempre puede haber la posibilidad que los problemas derivados de la demarcación y la formulación de linderos sean específicos al caso que estamos tratando. Pero, todo parece indicar que no es así.

En el 2013, la comunidad de Ccarhuac Licapa, distrito de Paras (Cangallo), exigió al gobierno regional de Ayacucho (GRA) la modificación del Proyecto de Saneamiento de Límites de la provincia de Cangallo, porque no se había incluido a los territorios en disputa con la vecina comunidad de Llillinta, Ingahuasi (Pilpichaca, Huancavelica). Dos años después, los comuneros consideraron que los avances eran muy pocos y vienen demandando la aceleración del proceso<sup>34</sup>.

Según Raúl Martínez, gerente de la municipalidad de Paras, la municipalidad de Cangallo y la Subgerencia de Demarcación Territorial del GRA consultaron a la población de la comunidad de Ccarhuacc Licapa a qué distrito deseaban pertenecer y “el 90% de la población votó por el distrito de Paras”. Sin embargo, Martínez señaló que el problema se localiza ahora en las localidades de Ccarhuacc Pampa, Rumichaca y Occoropampa, donde falta ubicar los hitos. Asimismo, dijo que estas cuatro comunidades pertenecían al distrito de Paras y no a Huancavelica. “El otro asunto es que las poblaciones de estas cuatro comunidades tienen a sus hijos registrados en la

---

<sup>34</sup> Ver, <http://noticiasser.pe/07/10/2015/ayacucho/ayacucho-saneamiento-de-limites-de-la-provincia-de-cangallo-avanza-pesar-de-tens>

municipalidad de Pilpichaca, así como sus documentos de identidad. Hay que cambiar todo eso”<sup>35</sup>.

Orestes Jayo, presidente de la comunidad de Paras, dijo que toda la demora respecto a este tema se explica por la mala propuesta que hicieron los funcionarios del gobierno regional de Ayacucho al plantear el saneamiento de límites de la provincia de Cangallo. “Todo fue consecuencia de hacer trabajos en gabinete, sin llegar a las mismas comunidades”.

Otro factor que está demorando la elaboración del expediente de saneamiento de límites de la provincia de Cangallo son las pretensiones de la comunidad de Chuschi, cuyos dirigentes han aprovechado esta oportunidad para buscar la distritalización de este territorio. Tanto Raúl Martínez como Orestes Jayo indicaron que esta aspiración podría verse frustrada por el hecho de que solo seis de las once comunidades que se sumaron a la iniciativa continúan apoyando tal propuesta<sup>36</sup>.

Como señalábamos líneas arriba, las deficiencias en la construcción de memorias, que enfatizan las relaciones sociales que se tejen para la producción y la gestión de los recursos naturales, impide que se forme una valoración de estos aspectos y, por tanto, no puede visualizarse la probabilidad de producción de violencia. Es lo que confirma la apreciación del presidente comunal de Chacolla, Aparicio Escalante, quien predice altas probabilidades de conflictos ante la cartera creciente de situaciones no resueltas, pero desde la situación imaginaria de que en esos lugares no hubo conflicto. También es lo que trasluce las declaraciones de los funcionarios y autoridades que están inmersos en la delimitación de las comunidades de Cangallo.

Aun así, hay esfuerzos locales que intentan cambiar la persistencia de los problemas. El 2 de diciembre del 2014 en el Encuentro Voces por el Clima, durante la COP 20, quedó en evidencia los esfuerzos hechos por las sociedades locales para la regeneración del tejido social, que buscaban poner nuevamente en marcha los procesos productivos y, además, adecuarlos a los nuevos desafíos que plantea el Cambio Climático cuando se premió a la Asociación Bartolomé Arispaylla (ABA), de Ayacucho, en el Concurso Buenas Prácticas frente al Cambio Climático en el medio rural, en el marco del Premio Nacional Ambiental 2014, organizado por el Ministerio del Ambiente (MINAM).

La experiencia de ABA en Quispillacta es reveladora respecto a la recuperación de infraestructura y la rearticulación del tejido social para que la sociedad “vuelva” a funcionar en la dimensión productiva. Sin embargo, debe tenerse en cuenta para una correcta apreciación de lo realizado por ABA que a la muy poca literatura que hay respecto a los antecedentes sobre las sociedades y economías locales que fueron blanco de los actores de la violencia política se suma el hecho de lo prácticamente inexistente que son las evaluaciones post-conflicto que permitan formarnos una idea de las dimensiones del daño y las lógicas de las intervenciones que ayude a superarlo.

En este panorama tan exiguo destaca las conocidísimas contribuciones de Billie Jean Isbell precisamente sobre Chuschi, que ya hemos citado, desde su artículo de 1974 que forma parte de la compilación que hiciera Giorgio Alberti y Enrique Mayer sobre la

---

<sup>35</sup> *Idem.*

<sup>36</sup> *Idem.*

reciprocidad y el intercambio en los Andes<sup>37</sup> hasta su libro aparecido en 1978 y reeditado en 1985<sup>38</sup>, siendo traducido al castellano recién en 2005<sup>39</sup>.

Sobre este último, Pablo F. Sendón publicó una densa reseña crítica<sup>40</sup> en el que sintetiza la descripción de Isbell sobre Chuschi previo al conflicto interno, siendo el factor determinante la habilidad comunal desarrollada para resistir los cambios:

“La estrecha integración de la explotación ecológica y la organización política y social con los procesos rituales, es tanto una fortaleza como una debilidad contra la intromisión del mundo externo. Ella resistirá los cambios mientras las relaciones estructurales —las variaciones de los temas del dualismo— funcionen para conservar el cierre económico y social. Pero con un sistema tan integrado, un cambio en una de las estructuras provocará transformaciones en todas las demás. Los comuneros dicen: ‘Defendernos es defender nuestras tradiciones’. Si podrán hacer esto en el futuro o no, depende del resultado del proceso dialéctico entre los principios estructurales y los eventos históricos”<sup>41</sup>.

Como podrá suponerse, esta manera de organizarse debió haber tenido altos impactos con la aparición de Sendero Luminoso. Más aun cuando las partes constituyentes mantenían un precario equilibrio en base a tensiones prontas a convertirse en conflictos abiertos. Señala Isbell, en la Nota agregada a la reedición de 1985 de su libro, que el cinco por ciento de la población de Chuschi y Quispillacta fueron reportadas como desaparecidas por Amnistía Internacional:

“Los dos pueblos tienen una larga historia de interacciones violentas; el primer conflicto que pude documentar fue en 1593 ... es muy posible que los arrestos masivos de quispillacteños el 21 de mayo de 1983 haya sido motivado por acusaciones de chuschinos como una manera de atacar a sus viejos enemigos”<sup>42</sup>.

Las relaciones entre la situación previa y el desenlace violento durante los años 80 en Chuschi-Quispillacta mantiene muchos aspectos desconocidos y no podríamos arriesgar un inventario de permanencias y cambios sociales sin caer en el inmenso riesgo de la conjetura. En todo caso, lo que tenemos a partir de los proyectos de ABA es que desde hace más de veinte años, mediante faenas comunales, la comunidad campesina de Quispillacta, ubicada entre 2,800 a 4,600 m.s.n.m., inició la crianza de lagunas impulsando la práctica de siembra y cosecha de agua.

Con esta práctica los comuneros de Quispillacta buscan responder al problema de escasez de agua en las comunidades adyacentes a las cuencas

---

<sup>37</sup> Isbell, Billie Jean: “Parentesco andino y reciprocidad. Kukaq: los que nos aman”. En Giorgio Alberti y Enrique Mayer (compiladores): *Reciprocidad e intercambio en los Andes*. Perú Problema 12. IEP. Lima, 1974; pp. 110-152

<sup>38</sup> Isbell, Billie Jean: *To Defend Ourselves ... op. cit.*

<sup>39</sup> Isbell, Billie Jean: *Para defendernos. Ecología y ritual en un pueblo andino*. Centro Bartolomé de las Casas. Cusco, 2005.

<sup>40</sup> Sendón, Pablo F.: “Ecología, ritual y parentesco en los Andes. Notas a un debate no perimido”. En: *Debate Agrario*. Análisis y Alternativas 40/41. Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES. Lima, 2006, pp. 273-297.

<sup>41</sup> *Idem.*, p. 294.

<sup>42</sup> Isbell; 1985, Note pp. XII-XIII. “The two villages have a long history of violent interactions; the first conflict that I was able to document was in 1593 (see pages 65-66). I think that it is very possible that the massive arrests of Quispillaqtenos on May 21, 1983 was motivated by accusations lodged by Chuschinos as a means of attacking their old enemies”.

de los ríos Pampas y Cachi-Mantaro, provocado entre otros factores por las bajas tasas de recarga hídrica y la rápida desaparición de los nevados que alimentan sus fuentes primarias como efecto del cambio climático, que también trae como impacto negativo el aumento de la agresividad del granizo y severidad de las heladas<sup>43</sup>.

ABA fue fundada en 1991, autodefiniéndose como un Núcleo de Afirmación Cultural Andina (NACA), asentada en la comunidad de Quispillacta, cuyo propósito fue construir una propuesta de desarrollo comunal de origen campesino-indígena en escenarios de post-violencia. Desde su perspectiva, la violencia había quebrado las relaciones y a partir de ello empezaron a plantearse principios para organizar la gestión del territorio subrayando “la importancia de la afectividad en las relaciones para el desarrollo: sembrar de todo, por todos, para alimentar a todos”.

En esa línea, la propuesta debía volver sobre “los valores que provienen de nuestra cultura ancestral”, buscando superar la discriminación, la exclusión, destrucción de valores y pérdida de ánimo, resumido en la consigna, “hay que creer, para ver”. En suma, debía aprenderse a actuar localmente para superar la destrucción del pasado y enfrentar los retos actuales.

Como puede deducirse, el campo de acción de la intervención de ABA es la cultura y agricultura campesina andina cuyos componentes, desde su perspectiva, pueden garantizar sostenibilidad de la diversidad y variabilidad genética y cultural, pese a desarrollarse en condiciones extremas. De esta manera, actúan en cuatro líneas de acción en las que la memoria deja de ser recuerdo y pasa a ser actividad:

- la regeneración de sabidurías y cosmovisión campesina;
- la regeneración de ecosistemas andinos;
- la crianza de la biodiversidad;
- el fortalecimiento de la organicidad social.

En ese sentido, el programa de ABA contempla aspectos como la recuperación de la diversidad genética, viviendas saludables, recuperación de áreas de cultivo, mejoramiento de pastos, control del trabajo infantil y de las mujeres, recuperación del paisaje, además de la siembra y cosecha de agua.

Hasta el momento, estos proyectos han contribuido decisivamente, por ejemplo, en la recuperación de la diversidad y variabilidad de semillas, una cuestión muy importante porque los elementos del manejo social y técnico de este capital fue destruido por la violencia política y, posteriormente, por la aplicación de proyectos que no contemplaban ni la fragilidad de los ecosistemas ni las características de la organización social que debía gestionar estos recursos.

El caso de ABA, además de presentarnos un ejemplo de cómo superar los efectos de la violencia mediante prácticas que reconstituyen la gestión de recursos y la producción, también muestra los límites que impone el contexto, entre ellos la inexistencia de adecuados criterios que faciliten el diálogo intercultural; en ese sentido, es por demás exigua la inversión en la recuperación y potenciamiento de saberes y tecnologías ancestrales que propongan un relación más armónica entre recursos naturales y sociedad, de la misma manera que permitan superar situaciones generadas por contextos altamente conflictivos.

---

<sup>43</sup> Ver, <https://grupoperucop20.lamula.pe/2014/12/03/reconocen-practica-de-siembra-y-cosecha-de-agua-en-ayacucho/grupoperucop20/>